

# AMERICA LATINA 2025-2030: INCERTIDUMBRE Y RECOMPOSICIÓN

## 12 TENDENCIAS DE CAMBIO

En lo que va de 2025, existe una percepción generalizada de que el mundo está entrando en un período de gran incertidumbre y una notable recomposición de los equilibrios políticos, económicos y sociales. En este contexto, una combinación sin precedentes de desafíos estructurales se funde con una coyuntura de cambio político disruptivo, que está reconfigurando significativamente los futuros escenarios económicos y sociopolíticos de la región. Este documento ofrece una primera aproximación a las principales tendencias de cambio que América Latina podría experimentar en los próximos cinco años, a partir de una revisión de análisis recientes y la opinión de 42 expertos latinoamericanos consultados por Oxfam en Latinoamérica y El Caribe. Las reflexiones finales llaman a una reinvencción estratégica a favor de la justicia social, abordando cuatro desafíos críticos: entender el cambio (ideas), reforzar narrativas sobre derechos, repensar la cooperación y proteger el espacio cívico.

### Documentos de debate de Oxfam

El objetivo de los documentos de debate de Oxfam es contribuir al debate público y suscitar el intercambio de ideas sobre cuestiones de política humanitaria y de desarrollo. Se trata de documentos “vivos”, “en evolución”, que no constituyen un trabajo definitivo ni reflejan las posturas políticas de Oxfam. Las opiniones y recomendaciones aportadas son de los autores y no reflejan necesariamente las de Oxfam.

# ÍNDICE

<b>ÍNDICE</b>	<b>2</b>
<b>AGRADECIMIENTOS</b>	<b>3</b>
<b>INTRODUCCIÓN</b>	<b>4</b>
<i>Tendencias de cambio en una coyuntura incierta</i>	4
<i>América Latina a inicios del 2025: estancamiento, fragilidad democrática y coyuntura disruptiva</i>	5
<b>ESFERA 1: EL FUTURO DE LAS POLÍTICAS SOCIOECONÓMICAS Y AMBIENTALES EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE</b>	<b>9</b>
<i>Primera tendencia. Lento crecimiento económico, extractivismo reforzado y frágil inserción internacional</i>	9
<i>Segunda tendencia. Límites fiscales y políticos para las políticas redistributivas</i>	11
<i>Tercera tendencia. El riesgo de un gran retroceso en los esfuerzos para preservar los ecosistemas y enfrentar el cambio climático</i>	12
<b>ESFERA 2: LOS RETOS EN UN MUNDO MULTIPOLAR Y CON DISPUTAS GEOPOLÍTICAS</b>	<b>14</b>
<i>Cuarta tendencia. La disputa valórica en torno a los derechos humanos y el desarrollo sostenible</i>	14
<i>Quinta tendencia. Disputa geopolítica, área de influencia y débil integración regional</i>	15
<i>Sexta tendencia. Una nueva era en la cooperación para el Desarrollo</i>	17
<i>Séptima tendencia. Endurecimiento de las políticas migratorias</i>	20
<b>ESFERA 3: RENOVAR LA DEMOCRACIA Y DEFENDER LOS DERECHOS LOGRADOS</b>	<b>22</b>
<i>Octava tendencia. Debilitamiento de la democracia y crisis de representación</i>	22
<i>Novena tendencia. La disputa política por los derechos de las mujeres y las diversidades</i>	23
<i>Décima tendencia. Seguridad pública: la pulsión autoritaria</i>	24
<i>Décimo primera tendencia. Espacios cívicos debilitados, pero con nuevos actores emergentes</i>	25
<i>Décimo segunda tendencia. Digitalización y nuevas formas de comunicar, participar, polarizar y generar conflicto</i>	26
<b>REFLEXIONES FINALES</b>	<b>28</b>
<b>DOCUMENTOS CONSULTADOS Y LECTURA SUGERIDA POR ESFERA</b>	<b>29</b>
<b>NOTAS</b>	<b>32</b>

# AGRADECIMIENTOS

Este documento ha sido elaborado por Armando Ortuño Yáñez y coordinado por Verónica Paz Arauco por encargo de Gloria García Parra y Gloria Amézquita. El objetivo de este análisis es contribuir a una reflexión sobre el contexto en un escenario de alta incertidumbre socio política y de transición institucional, y aportar a una renovada agenda de influencia en la región.

Oxfam reconoce y agradece a las y los 42 especialistas de la región que participaron en la consulta Delphi por su significativo aporte al análisis y reflexión.

Agradecemos la revisión y retroalimentación recibidas de parte de: Alexandra Alayza, Daisy Ávila, Carlos Aguilar, Carlos Botella, Carlos Brown, Grazielle Custodio, Roxana Delgado, Jennifer Erazo, Lisbeth España, Carolina Fonseca, Jenny Gallegos, Maite Gauto, Laura Gómez, Carolina Gonçalves, Alexandra Hass, Martha Hernández, Juan Orellana, Lina Pinilla, Miguel Lévano, María Eugenia Luarca, Angélica Martínez, Sara Mery, Sandra Mojica, Lourdes Montero, Natasha Morales, Diana Palma, Efrén Pérez, Raquel Orozco, Ricardo Sáenz, Martha Sánchez, Viviana Santiago y Elizabeth Tregaskis-Gordon.

Diagramación y diseño: Marcela Rodríguez de Plump

# INTRODUCCIÓN

## TENDENCIAS DE CAMBIO EN UNA COYUNTURA INCIERTA

En este inicio de 2025, se extiende la opinión de que el mundo está entrando en un periodo de gran incertidumbre y de notable recomposición de los equilibrios políticos, económicos y sociales.

Los países latinoamericanos ya estaban enfrentando desde hace varios años notables desafíos para relanzar su economía, disminuir las desigualdades, fortalecer su democracia y enfrentar los cada vez más significativos efectos del cambio climático.

Por otra parte, a escala global ya se observaban señales del declive del multilateralismo, la emergencia de un mundo multipolar, la mutación hacia una globalización económica asociada a la emergencia de neonacionalismos, el auge de partidos y líderes populistas, la proliferación de conflictos armados, el malestar de las clases medias o la interferencia de las tecnologías de comunicación en la vida política y social.

Esa acumulación de transformaciones estructurales en la región y el mundo parecen estar siendo aceleradas y en algún caso exacerbadas por las políticas de la segunda presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, el país con la mayor economía y poder político y militar del planeta. Cambios que son particularmente relevantes para América Latina debido a la cercanía geográfica, importancia económica y a la larga historia que la región comparte con ese país.

Así pues, una inédita combinación de desafíos estructurales se está combinando con una coyuntura de cambio político disruptivo reconfigurando significativamente los escenarios económicos y sociopolíticos futuros.

En ese marco, este documento propone una primera aproximación de las principales tendencias de cambio que podría experimentar América Latina en los próximos cinco años a partir de una revisión de documentos de análisis recientes y la opinión de un grupo de 42 expertos latinoamericanos que fueron consultados por Oxfam.

# AMÉRICA LATINA A INICIOS DEL 2025: ESTANCAMIENTO, FRAGILIDAD DEMOCRÁTICA Y COYUNTURA DISRUPTIVA

Aunque hay diferencias históricas, culturales y sociales entre las varias subregiones y países que componen América Latina, existen rasgos comunes que están afectando a la mayoría de sociedades latinoamericanas en estos años.

De manera general, en el segundo decenio del siglo, el crecimiento económico se fue desacelerando después de un periodo de expansión de diez años. Paralelamente, la reducción de la pobreza se detuvo, la conflictividad social se intensificó y la inestabilidad política aumentó, mientras que la desconfianza en las instituciones públicas y el descontento con el funcionamiento de la democracia se mantuvieron en niveles elevados.

Esa etapa de inestabilidad se produjo después de un largo ciclo de transformaciones de envergadura en la estructura social de muchos países debido a la urbanización, la aceleración de la transición demográfica, la masiva entrada de las mujeres en la economía y la política, un crecimiento económico elevado, la mejora de condiciones sociales y la expansión de los segmentos socioeconómicos medios.

Cambios que motivaron evoluciones en las pautas de consumo, los comportamientos culturales y las preferencias políticas, en una región que, pese a sus vulnerabilidades, está viviendo mayoritariamente en democracia desde hace más de cuarenta años.

El estancamiento se agravó después de la pandemia del COVID 19: el crecimiento económico se recuperó lentamente, las pérdidas sociales no se compensaron y en varios países la confianza en las instituciones públicas se debilitó por su ineficacia en la gestión de la crisis sanitaria y social.

Entre 2021 y 2023, la inestabilidad política se profundizó y los niveles de insatisfacción con las instituciones alcanzaron máximos históricos. Aunque algunas de esas tendencias se atenuaron levemente en 2024, los problemas persisten y la región parece estar estancada tanto en la dimensión socioeconómica como política.

Después de algo más de un decenio de mejoras en los ingresos y condiciones de vida, varios países están enfrentando el fenómeno de la "trampa del ingreso medio" y surgen dudas sobre las orientaciones de su desarrollo económico e incluso la posibilidad de financiar nuevas políticas sociales o mejoras de las infraestructuras públicas.

Así pues, la discusión económica latinoamericana se está concentrando en la cuestión de cómo acelerar el crecimiento, diversificar la economía, mejorar la productividad y aumentar la inversión, y en menor medida sobre un nuevo impulso de redistribución. Frente a este desafío, tanto las orientaciones tradicionales de derecha como de izquierda, que gobernaron en estos años, aparecen con escasas respuestas y débil capacidad reformadora.

Por otra parte, los avances de las últimas décadas en materia de igualdad de género y de derechos de las diversidades están siendo cuestionados y en algunos casos se observan incluso retrocesos.

Parecería que la región está enfrentando importantes problemas de gobernabilidad debido al desajuste entre sus capacidades políticas e institucionales y las demandas crecientes de una sociedad más compleja, más demandante con sus gobernantes y que se comunica y organiza de nuevas maneras.

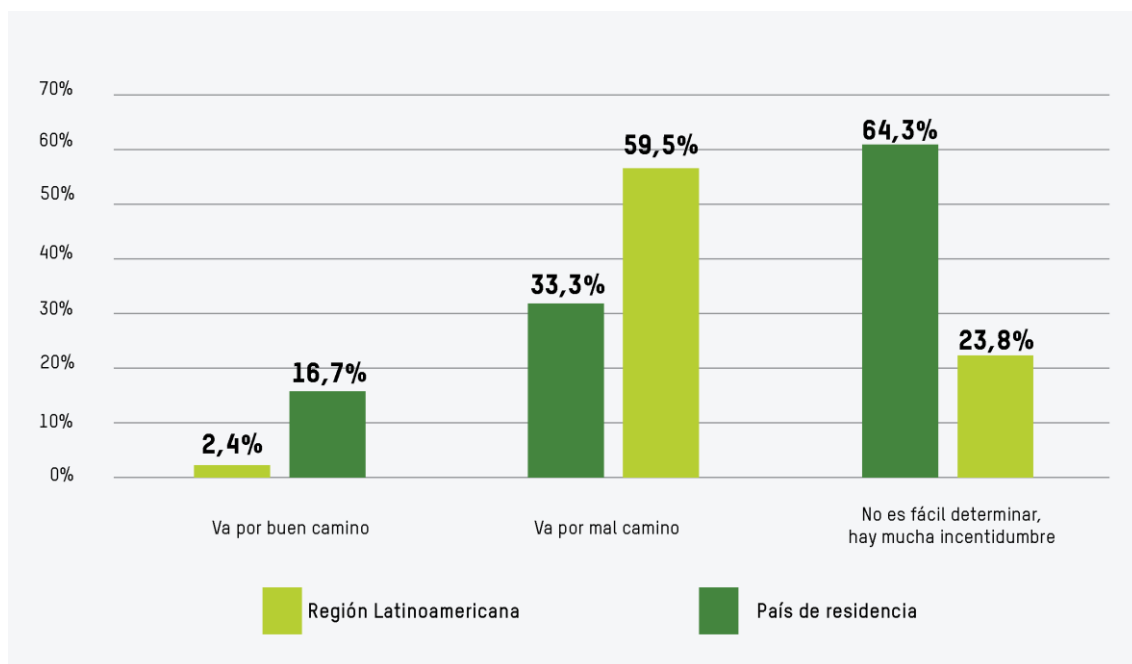
Dificultad de gobernar y de movilizar a la sociedad que se producen además en un momento en que se profundizan los desequilibrios y pérdidas por los efectos del cambio climático y en el que se complejizan problemas como la migración o la inseguridad pública.

Situación compleja que, como se verá más adelante, se complejizó aún más con los cambios políticos en Estados Unidos con la llegada de la nueva administración liderada por Donald Trump.

Por todas esas razones, la percepción de las y los especialistas entrevistados sobre el rumbo que está tomando la región y sus países de residencia es mayoritariamente negativa o incierta. Los sentimientos más frecuentes para referirse a la situación son “incertidumbre”, “retrocesos”, “temor” o “frustración” (Ver Cuadro 1 y 2).

Estado de ánimo que se refleja también en un marcado pesimismo sobre la evolución futura de la situación en casi todas las dimensiones clave del desarrollo regional (Cuadro 3). Sentimiento particularmente negativo sobre el futuro de la vulnerabilidad frente al cambio climático, el manejo de flujos migratorios, la relación de la región con Estados Unidos, la reducción de la desigualdad y la disminución de la corrupción.

**Cuadro 1. Rumbo de región y país en estos años (%)**



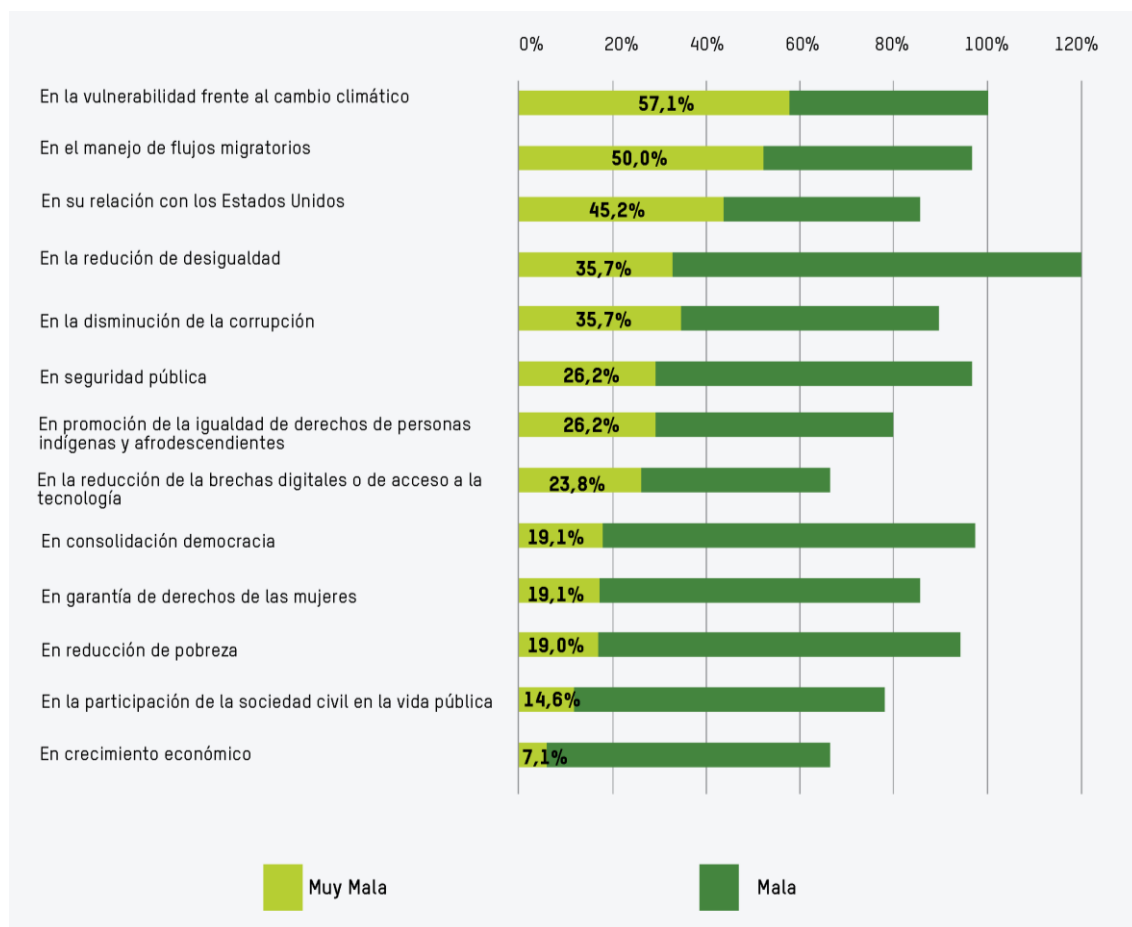
Fuente: Elaboración propia con base en consulta Delphi.

**Cuadro 2. Nube de palabras: sentimientos frente a la coyuntura regional**



Fuente: Elaboración propia con base en consulta Delphi.

**Cuadro 3. En los próximos tres años ¿Cómo cree que será la situación regional? (% muy mala y mala)**



Fuente: Elaboración propia con base en consulta Delphi.

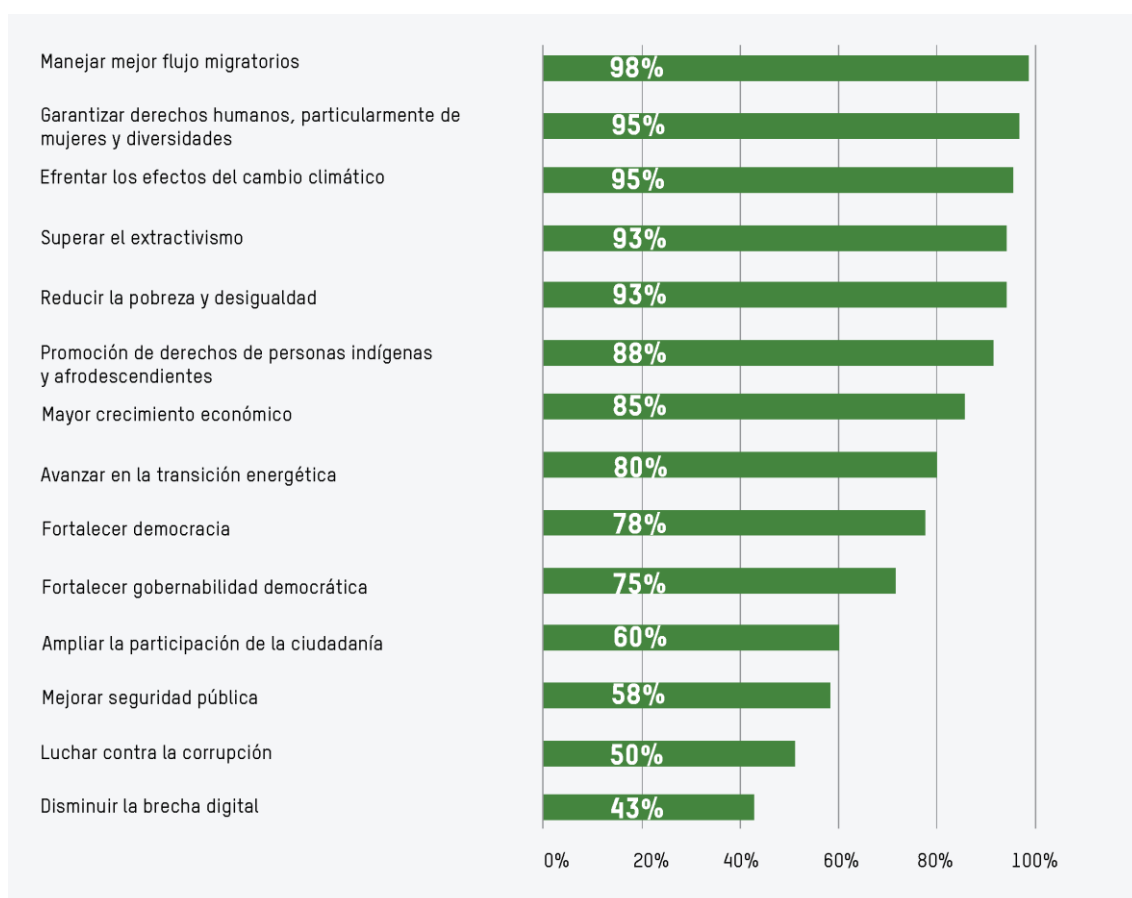
Esas opiniones reflejan también el fuerte impacto que está generando en toda la región las decisiones del gobierno del presidente Donald Trump, que en sus primeros cien días de administración ha impulsado fuertes cambios en las orientaciones de sus políticas migratorias, comerciales y de seguridad, las cuales podrían tener un gran impacto en América Latina.

El 85% de los entrevistados considera que esas orientaciones y políticas no serán solo coyunturales y que determinarán cambios de largo plazo en el funcionamiento de la política y economía globales. Es decir, son percibidas como transformaciones con posibles impactos de mediano y largo plazo.

América Latina ha sido una de las regiones más afectadas por las decisiones de Trump en el ámbito del endurecimiento de sus políticas migratorias y de seguridad, en la amenaza de aumentar aranceles comerciales a México y otros países de la región e incluso en el cuestionamiento acerca de la soberanía del Canal de Panamá. Según algunos voceros del nuevo gobierno, la región latinoamericana sería una suerte de área de influencia en la que los Estados Unidos desearía reforzar su presencia y hegemonía.

Por esas razones, hay una percepción muy negativa y generalizada de la posible afectación de esas políticas en la región (Cuadro 4) que abarca casi todas las dimensiones del desarrollo y muy particularmente ámbitos clave como la gestión de la movilidad humana, la garantía de derechos humanos, la capacidad de enfrentar el cambio climático o reducir la pobreza y la desigualdad.

**Cuadro 4. ¿Cómo podrían afectar las decisiones políticas del nuevo gobierno de EEUU en la evolución futura de los siguientes temas en la región latinoamericana? (% afectan negativamente)**



Fuente: Elaboración propia con base en consulta Delphi.

En síntesis, después de un cuarto de siglo de importantes transformaciones económicas y sociales, en muchos casos positivas, pero también de crisis que afectaron a sus instituciones y población, América Latina estaba ante grandes desafíos para relanzar su desarrollo sostenible y fortalecer su democracia.

En ese contexto ya complejo, las políticas disruptivas de Trump están reforzando aún más las dudas sobre el futuro de la región. El sentimiento de la mayoría de observadores es que estamos entrando a una fase muy incierta y con grandes riesgos de retroceso. Identificar las principales tendencias de este nuevo escenario es crucial para gestionarlas y lograr un mejor destino para los latinoamericanos.

A continuación, describimos, doce tendencias agrupadas en tres grandes esferas que se debe observar, analizar y en las que se debe construir propuestas innovadoras, movilizadoras de las capacidades sociales y favorables al bienestar y dignidad de las personas.

# ESFERA 1: EL FUTURO DE LAS POLÍTICAS SOCIOECONÓMICAS Y AMBIENTALES EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE

## PRIMERA TENDENCIA. LENTO CRECIMIENTO ECONÓMICO, EXTRACTIVISMO REFORZADO Y FRÁGIL INSERCIÓN INTERNACIONAL

En el primer decenio de este siglo, América Latina tuvo un crecimiento económico elevado, impulsado por el aumento de sus exportaciones de *commodities*, particularmente en América del Sur y de las remesas de trabajadores migrantes en Centroamérica. En algunos países, esa dinámica fue complementada por políticas redistributivas que mejoraron los ingresos de las personas pobres y el acceso a servicios públicos (agua, educación y salud).

La pobreza se redujo, la desigualdad bajó moderadamente y crecieron los segmentos de ingresos medios. Ese impulso empezó a agotarse y sufrió un gran retroceso durante la pandemia del COVID 19. La economía no se recuperó, la tasa de crecimiento fue de 2,4% en 2023 y de 2,4% en 2024, y se proyecta en 2,0% en 2025 y 2,4% para 2026<sup>1</sup>. En 2023, la pobreza total estaba a niveles de 2014 (27,3% de la población) y la extrema pobreza casi 3 puntos por encima (10,6% de la población) del nivel alcanzado en 2014-2015<sup>2</sup>.

En varios países, las actividades de extracción de minerales, hidrocarburos o cultivos extensivos no estuvieron acompañadas de una diversificación económica además de afectar negativamente al medioambiente. En otros, el aumento de las remesas no solucionó los problemas que motivaron la migración masiva, constituyéndose en un paliativo que incrementó el consumo de bienes importados sin generar empleo y mejoras de condiciones de vida.

Pasada la coyuntura favorable, la mayoría de las economías retornaron a un ritmo de crecimiento lento, desigual y volátil, e incluso algunas acumularon desequilibrios macroeconómicos y fiscales que deben ser solucionados.

El estancamiento no tiene que ver únicamente con la coyuntura, hay problemas estructurales que dificultan un crecimiento que genere empleos de calidad, equidad y sostenibilidad: la productividad sigue siendo baja debido a las brechas educativas, la alta informalidad laboral, las desigualdades sociales, los problemas regulatorios, el acceso diferenciado a activos y capacidades, entre otros. Se debe, de igual modo, enfrentar los desafíos de la caída de la fecundidad y el aumento de las migraciones que están ralentizando el aumento de la fuerza laboral.

Los problemas estructurales de desarrollo en la región están, de igual modo, asociados a la persistencia de elites extractivas que dominan sectores dinámicos favoreciendo la concentración del mercado y obstaculizando la innovación. La falta de competencia y la influencia desmedida de estos grupos sobre las políticas públicas favorece un entorno donde la productividad se estanca.

Acelerar el crecimiento económico mediante una mejor inserción en los mercados globales, mayor inversión, ajustes regulatorios y acciones proactivas para aumentar la productividad es uno de los principales objetivos en casi todos los países latinoamericanos.

En México y América Central se esperaba que la relocalización a la subregión de cadenas de producción industrial para el mercado de EEUU desde el Asia podría ser un factor de re-dinamización. Mientras que en Sudamérica se confiaba en aprovechar el creciente consumo de energía y minerales para la transición energética y de alimentos en China y las economías emergentes. Esas oportunidades debían facilitar las reformas para mejorar la productividad.

Los eventos económicos recientes están configurando un escenario difícil para el cumplimiento de esos objetivos. Los EEUU está reorientando sus políticas para desincentivar importaciones, atraer inversiones y favorecer la instalación de manufacturas en su territorio.

Los fuertes aumentos de aranceles para todas las economías del planeta están determinando un contexto proteccionista que no se había visto desde hace casi cien años. A lo que se adicionan los temores por una reducción del flujo de remesas debido al endurecimiento de la política migratoria en EEUU.

Por otra parte, la atracción de inversiones chinas podría enfrentar nuevas restricciones geopolíticas de parte de los EEUU, en una región que es percibido como parte de su esfera de influencia. La controversia sobre la gestión portuaria por empresas de ese país asiático en el Canal de Panamá es un ejemplo de esas tensiones.

A todas esas notables incertidumbres se adiciona los riesgos que se están generando por una posible contracción del comercio global, aumento de tasas de interés, presiones inflacionarias y desaceleración del crecimiento mundial.

En los próximos años, la región podría enfrentar una notable recomposición de su acceso al financiamiento para su desarrollo debido al efecto combinado de una contracción de sus exportaciones, estancamiento o reducción de la inversión extranjera y baja de las remesas. Las perspectivas económicas para América Latina ya no eran muy optimistas y en este nuevo contexto se están deteriorando aún más.

El escenario global y hemisférico se ha complejizado, haciendo más difícil la hipótesis que sugería que la transformación económica de América Latina podría ser impulsada por factores externos favorables. Incluso varias economías están obligadas a realizar, en este difícil contexto, fuertes ajustes macroeconómicos que tendrán impacto en la actividad y las condiciones de vida.

La orientación de las reformas económicas en la región está cada vez más influida por posiciones que abogan por la liberalización de mercados, una reducción agresiva de la regulación, disminución de impuestos y la reivindicación del individualismo y por tanto el rechazo a medidas distributivas o de reducción de las desigualdades.

Ante el estancamiento, se están también fortaleciendo los incentivos para un desarrollo más intenso de actividades extractivas (minería, agroindustria, hidrocarburos, etc.), ya sea porque son una opción para generar crecimiento e ingresos fiscales o debido a que es el ámbito en el que las transformaciones geo-económicas globales parecen favorecer la especialización de la región.

Ante la necesidad de avanzar en una transición energética y los requerimientos que implica el auge de la digitalización y la inteligencia artificial, en todo el planeta se están redefiniendo los requerimientos de energía, acceso a minerales estratégicos y otros recursos. En ese sentido, América Latina, que cuenta con una dotación de esos recursos abundante, se está volviendo un campo de disputa geopolítica y de posibilidades de inversión. La persistencia de élites extractivistas con gran poder facilita este proceso.

Sin embargo, esta tendencia enfrenta grandes problemas. Se produce en un momento en que hay mayor conciencia social sobre sus impactos negativos en el medio ambiente y sus limitaciones para impulsar un desarrollo equilibrado, generando importantes conflictos sociales que podrían intensificarse en el futuro.

En síntesis, la región que necesitaba urgentemente un nuevo impulso económico está encarando grandes incertidumbres que pueden empeorar sus perspectivas de crecimiento. Dependiendo del ritmo de los cambios globales tendrá posiblemente que replantear su inserción externa y repensar el financiamiento de su desarrollo. Ante esas presiones y necesidades, existe el gran riesgo de que el extractivismo sea entendido como una solución a los problemas, complementado de una liberalización y desregulación agresiva de la economía.

Sin embargo, hay también evidencias que indican que, sin una transformación estructural profunda, es probable que la región siga atrapada en un ciclo de bajo crecimiento y alta desigualdad. Hay necesidad de avanzar en reformas institucionales, políticas educativas y de innovación tecnológica, sistemas tributarios más justos, opciones para reinventar una economía post-extractivista y nuevas políticas sociales.

Las cuales deberían ser complementadas con inteligentes estrategias económico-políticas para encontrar una posición favorable en la abierta competencia geoeconómica que las grandes potencias industriales librarán en los próximos años.

## **SEGUNDA TENDENCIA. LÍMITES FISCALES Y POLÍTICOS PARA LAS POLÍTICAS REDISTRIBUTIVAS**

En el inicio de este siglo, la acción del estado se amplificó en el ámbito social, sin importar la orientación ideológica de los gobiernos. En 2000, el porcentaje del PIB que se destinaba al gasto público social era de 8,3%, quince años después alcanzó el 11%, expandiéndose luego hasta el 13,7% durante la pandemia, para luego volver a un nivel estable de 11,5% en 2023<sup>3</sup>.

Se impulsaron grandes programas de transferencias condicionadas y no condicionadas y se invirtió masivamente en infraestructuras de salud, educación y saneamiento básico. En Brasil, México y otros países, se ejecutaron políticas laborales que aumentaron los ingresos y mejoraron las condiciones de vida de los trabajadores. Ese esfuerzo afectó positivamente los indicadores sociales, mejorando la calidad de vida de millones.

Sin embargo, esas políticas tuvieron límites. No pudieron reducir los bolsones de pobreza extrema, no solucionaron los problemas de calidad de los servicios públicos, que expandieron su cobertura sin estar listos para gestionar a sus nuevos beneficiarios y contribuyeron modestamente a un aumento de la productividad del trabajo y por tanto a un aumento sostenible de ingresos y salarios.

Pese a los avances, la región sigue siendo muy desigual y alberga a grandes grupos de población con muchas carencias, lo que exige una potente acción de redistribución. De igual manera, los servicios públicos, como la educación o el transporte, son clave para mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas, para lo cual se precisan recursos y un renovado rol del Estado.

Por tanto, la agenda social latinoamericana enfrenta hoy varios retos. Por una parte, tiene que acompañar los cambios demográficos que afectan la prestación de servicios sociales, las demandas de mejores empleos, ingresos estables y servicios públicos de calidad de los segmentos socioeconómicos medios y emergentes, y la necesidad de continuar con esfuerzos para reducir la pobreza mediante nuevos esquemas de transferencias o de política social distributiva que favorezca a los grupos más vulnerables.

Frente a este gran desafío que combina continuidad e innovación, están emergiendo dos grandes restricciones. En primer lugar, el deterioro de los equilibrios macroeconómicos y fiscales que están llevando a un estancamiento del gasto público e incluso a su contracción en varios países. Frente a la falta de recursos, la opción privilegiada ha sido el recorte de gastos, incluyendo los que atienden al sector social, y no el rediseño de los sistemas tributarios de manera que sean más justos y que aumenten la contribución de los sectores con mayor riqueza.

Si bien, hay necesidad de seguir trabajando en opciones de política con una visión más integral de los gastos e ingresos de los estados, de manera que se puedan financiar las políticas sociales sin generar desequilibrios dañinos. La mayor restricción viene por el lado de las expectativas sociales y la política.

No hay acuerdos sociales sólidos, como a inicios de siglo, sobre la necesidad de una política social distributiva potente, muchos ciudadanos de segmentos medios y emergentes las rechazan porque consideran que no les benefician y que incluso les cuestan. Esas discusiones se están además polarizando con el crecimiento político de las opiniones libertarias que proponen argumentos meritocráticos, individualistas y de rechazo radical a la intervención del estado y la protección social.

La renovación y relanzamiento de una ambiciosa política social que atienda a los graves problemas de desigualdad y que contribuya a un crecimiento sostenible está en duda por la falta de consensos sociopolíticos, por los problemas financieros de los estados, que además se están complicando por el actual escenario de incertidumbre, pero, de igual modo, por cierto agotamiento del discurso sobre la distribución y la desigualdad frente al dinamismo de las voces que reclaman la reducción del Estado y la responsabilidad individual.

## **TERCERA TENDENCIA. EL RIESGO DE UN GRAN RETROCESO EN LOS ESFUERZOS PARA PRESERVAR LOS ECOSISTEMAS Y ENFRENTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO**

El rápido cambio de los patrones climáticos y la temperatura media en el planeta es una de las cuestiones vitales para el futuro de la humanidad. Hay acuerdo en que estos procesos son notablemente afectados por las actividades humanas, particularmente debido a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas que generan emisiones de gases de efecto invernadero. También están afectando el desmonte de tierras y bosques y otras actividades industriales, de transporte o de construcción.

La temperatura media de la tierra es 1,1 °C más elevada que a finales del siglo XIX, antes de la revolución industrial, y más elevada en términos absolutos que en los últimos 100 000 años. La última década (2011-2020) fue la más cálida registrada. Pero el aumento de la temperatura sería sólo el principio. Como la Tierra es un sistema, en el que todo está conectado, los cambios de una zona pueden influir en los cambios de todas las demás.

Miles de científicos coincidieron en que limitar el aumento de la temperatura global a no más de 1,5 °C nos ayudaría a evitar los peores impactos climáticos y a mantener un clima habitable. Sin embargo, las políticas actuales apuntan a un aumento de la temperatura de 2,8°C para finales de siglo.

Las consecuencias del cambio climático se vienen padeciendo e incluyen entre otras, deshielo de los polos, escasez de agua, aumento del nivel del mar, sequías intensas, inundaciones, incendios graves, disminución de la biodiversidad y tormentas calamitosas. Además, puede afectar a la salud, a la capacidad de cultivar alimentos, a la vivienda, a la seguridad y al trabajo. América Latina alberga a muchas zonas particularmente vulnerables a los impactos climáticos.

En este contexto de emergencia mundial, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París son marcos globales para guiar el progreso en tres categorías de acción: reducir las emisiones, adaptarse a los impactos climáticos y financiar los ajustes necesarios.

Si bien varios países se comprometieron a alcanzar las emisiones cero para 2050, alrededor de la mitad de los recortes en las emisiones deben producirse antes de 2030 para mantener el calentamiento por debajo de 1,5 °C. En ese marco, se plantean cambios profundos para pasar de

sistemas energéticos basados en combustibles fósiles a energías renovables y una transformación energética, económica y de estilos de vida de gran amplitud. El financiamiento de esta transición, particularmente en los países con menos ingresos, es un aspecto central para avanzar.

En los últimos años, el impulso de estas políticas se fue desacelerando, sus costos fueron percibidos como muy elevados, segmentos de la sociedad se sintieron afectados y algunas fuerzas políticas expresaron su escepticismo o rechazo a estas orientaciones. Entre sus primeras medidas, la administración Trump anunció un retroceso significativo en el compromiso de Estados Unidos con estos compromisos y políticas.

Se anunció la reducción del financiamiento para temas de cambio climático, debilitando los esfuerzos globales y afectando los recursos disponibles para estas políticas en países vulnerables en América Latina y el Caribe, la retirada del Acuerdo de París sobre el cambio climático y una parálisis de las inversiones y gastos públicos dedicados a la transición verde y a la promoción de energías renovables.

Esto es particularmente grave pues EEUU fue históricamente el país con mayores emisiones de carbono y el segundo en la actualidad después de China. Su alejamiento de las metas globales incide negativamente en lograr limitar el calentamiento por debajo del 1,5 °C. Si bien todos los países deben tomar medidas, las personas y los países que generan más problemas tienen una mayor responsabilidad. En este sentido, EEUU estaría negando su responsabilidad no solo como emisor histórico sino de hacerse cargo de las emisiones y soluciones a futuro.

Se afecta, de igual modo, el compromiso de los países industrializados de aportar 100 000 millones de dólares anuales a los países en desarrollo para que puedan adaptarse y avanzar hacia economías más ecológicas.

Este nuevo curso que toma EEUU no es nuevo, ya en 2016 se produjo un retiro durante la primera presidencia Trump. En esa oportunidad, estuvo técnicamente fuera del Acuerdo de noviembre del 2020 a febrero de 2021; decisión que luego fue revertida por su sucesor, Joe Biden. Aunque los gobiernos locales, las empresas, las organizaciones y la ciudadanía estadounidenses pueden seguir trabajando en función de los objetivos climáticos, el retiro de la administración federal plantea grandes retos.

Un efecto indirecto de este nuevo alineamiento, es que incentiva que otros gobiernos también avancen en una agenda de retroceso y rechazo a las acciones contra el cambio climático. En América Latina, el gobierno de Jair Bolsonaro fue un ejemplo y en estos días el presidente Javier Milei también comunicó la posibilidad de sacar a Argentina del Acuerdo de París.

Es evidente que el cambio climático no será una prioridad de los EEUU en los próximos años, al contrario, impulsará más bien una agenda de promoción de las explotaciones hidrocarburíferas y de ralentización de la transición verde. Lo que obliga a los países latinoamericanos a buscar cooperación con otras naciones comprometidas con este tema a pesar de las restricciones.

Sumado a la postura regresiva de Estados Unidos y algunos países frente al cambio climático —con el debilitamiento de políticas ambientales y el impulso a combustibles fósiles— y a pesar de los esfuerzos de otros países por avanzar en compromisos verdes, en América Latina se observa una preocupante promoción y expansión de industrias extractivistas en todo el continente. Gobiernos de distintas orientaciones políticas están incentivado sectores como la minería, los hidrocarburos y el agronegocio, que no sólo contribuyen significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que además generan deforestación masiva, contaminación de fuentes de agua y conflictos socioambientales.

Esta contradicción entre los discursos sostenibles y las prácticas extractivistas refleja un modelo de desarrollo que sigue privilegiando el corto plazo económico sobre la sostenibilidad del territorio y las comunidades. Posición que en la actualidad está fortalecida por las incertidumbres económicas y el crecimiento de las opiniones que sugieren privilegiar el crecimiento económico a cualquier costo.

# ESFERA 2: LOS RETOS EN UN MUNDO MULTIPOLAR Y CON DISPUTAS GEOPOLÍTICAS

## CUARTA TENDENCIA. LA DISPUTA VALÓRICA EN TORNO A LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Coincidiendo con el fin de la guerra fría, en una América Latina que volvía al cauce democrático, se inició un largo periodo, de al menos veinte años, en los que se fueron fortaleciendo los discursos y las narrativas relacionadas con el respeto de los derechos humanos y la expansión de los valores democráticos.

Una gran mayoría de las élites políticas de las nuevas democracias adhirieron, aunque sea formalmente, a principios democráticos e impulsaron, tanto a nivel interno como en los espacios multilaterales, instituciones e iniciativas para protegerlos y promoverlos. Florecieron organizaciones de la sociedad civil que fueron ampliando las fronteras, reivindicando primero derechos políticos y luego una amplia gama de derechos individuales y colectivos.

Las ideas sobre el desarrollo fueron también evolucionando, primero con el reconocimiento de la importancia de los derechos sociales, que llevó a repensar las políticas públicas introduciendo conceptos como “desarrollo humano”, “sostenibilidad” o “reducción de las desigualdades”, que luego empezaron a ser operativizadas por varios gobiernos.

De igual modo, el impulso de la igualdad entre hombres y mujeres o el respeto de los derechos de las diversidades sexuales se intensificaron, produciendo una nueva generación de normativas y cambios en la política pese a las resistencias de sectores conservadores.

En ese periodo, América Latina fue una de las regiones con mayor involucramiento en la construcción de un marco normativo multilateral para proteger y promover los derechos humanos. Aunque no siempre esas orientaciones eran implementadas con todos sus alcances, eran relativamente respetadas y asumidas por la mayoría de las dirigencias y tenían una reputación positiva en la opinión pública masiva.

En la segunda década de este siglo, el panorama empieza a modificarse, primero con la aparición de organizaciones que reivindicaban una agenda conservadora, de protección de la familia y anti feminista, y luego con la popularización, en redes sociales y medios, de discursos que enfatizan una lucha cultural contra la denominada “ideología de género”.

Con el triunfo sorpresivo de Jair Bolsonaro en Brasil en 2019, la agenda conservadora obtuvo una gran exposición asociada además a discursos de “mano dura” en seguridad y un rechazo de las ideologías llamadas “globalistas” (cuidado del medio ambiente y respeto de derechos humanos). Este fenómeno estuvo asociado a la aparición de derechas populistas en Estados Unidos y Europa. En los últimos años, los movimientos que combinan liberalismo económico y conservadurismo social se fortalecieron y extendieron, influyendo en la opinión pública, apoyando a nuevas fuerzas políticas y contribuyendo a que algunas de ellas lleguen al poder.

Han logrado colocar y difundir masivamente sus orientaciones en la opinión pública, cuestionando abiertamente los consensos en torno al respeto de derechos y las políticas distributivas. Cada vez con más frecuencia, hay fuerzas sociales y políticas que cuestionan la igualdad de género, la Agenda 2030 de objetivos de desarrollo sostenible y los derechos de la población LGBTQ.

En algunos países de la región, eso se ha traducido en retrocesos normativos y en la cancelación de políticas y programas que apuntan a la promoción de la igualdad, la diversidad o la lucha contra el cambio climático, como está pasando en la administración federal de Estados Unidos en este momento.

Aunque estas expresiones están encontrando resistencias y no son hegemónicas, su activismo es intenso, bien organizado y ahora además cuentan con reputación, mayores recursos y respaldo político.

Cuestiones, que se asumían como ampliamente aceptadas por la sociedad, están hoy en cuestión y precisan ser defendidas. El riesgo es que se cuestionen una amplia gama de normas, garantías y políticas relacionadas con los derechos, la desigualdad y el desarrollo que deriven en retrocesos sociales en toda América Latina.

## **QUINTA TENDENCIA. DISPUTA GEOPOLÍTICA, ÁREA DE INFLUENCIA Y DÉBIL INTEGRACIÓN REGIONAL**

Los objetivos geopolíticos están cada vez más en el corazón de las decisiones políticas y económicas de los países. Parecería que estamos transitando a un mundo multipolar y notablemente desordenado sin que aún estén claros los nuevos arreglos y mecanismos para su estabilización.

En ese contexto, varias grandes potencias están impulsando políticas que reivindican “espacios o zonas de influencia” geopolítica, en las que desean incidir unilateralmente y de manera predominante. Para lo cual, a veces recurren al uso de su poder económico, comercial e incluso militar para imponer sus posiciones a otros países.

Esta tendencia está debilitando a las instituciones multilaterales que fueron creadas para regular las controversias geopolíticas, comerciales y socioeconómicas sobre la base de un respeto a un conjunto de normas de derecho internacional. Esto es particularmente preocupante para países pequeños y medianos que recurrían a esos espacios para dialogar y negociar con las grandes potencias en mejores condiciones.

Las guerras en Ucrania, Gaza y otros conflictos armados recientes, la utilización a gran escala por el EEUU de los aranceles comerciales para lograr objetivos políticos y la exclusión de Naciones Unidas y otras instancias multilaterales en la resolución de los principales problemas económicos y geopolíticos actuales son ejemplos del debilitamiento de las normas y el derecho internacional que sostuvieron el orden internacional después de la Segunda Guerra Mundial.

La cada vez más aguda competencia comercial, diplomática, tecnológica y militar entre los Estados Unidos (EEUU) y China en todo el planeta es uno de los rasgos de esta nueva etapa. Enfrentar la emergencia de ese país asiático es el principal objetivo geopolítico de los EEUU desde hace 10 años y es uno de los principales argumentos utilizados por la administración Trump para justificar sus políticas comerciales proteccionistas y su unilateralismo.

En ese contexto, América Latina está siendo una de las regiones en las que más se ha sentido el cambio de orientaciones de la política exterior estadounidense que está incluso teniendo ciertos rasgos intervencionistas. Se está fortaleciendo en EEUU una visión que considera a la región como un “espacio de influencia” exclusivo de esa potencia en la que se debe producir un alineamiento con los intereses e incluso con las políticas internas de ese país.

En sus primeros cien días, el nuevo gobierno estadounidense ha logrado el apoyo de varios países de América Central a la operativización de su política migratoria, avanzó en una profunda reconfiguración de su relación comercial y política con México, su gran vecino latinoamericano, manifestó su interés por controlar una ruta naviera clave como el Canal de Panamá y expresó su hostilidad a las inversiones y acuerdos de varios países con China.

Llama la atención que salvo el apoyo político que aportó al gobierno de Argentina en su negociación por un nuevo crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), el renovado activismo de la administración Trump en la región se ha concentrado inicialmente en imponer sus orientaciones en cuestiones migratorias o de seguridad, sin ofertar opciones de apertura comercial, inversiones o de cooperación para lograr beneficios compartidos.

Al contrario, el aumento indiscriminado de aranceles, la reducción de la ayuda al desarrollo debido al brusco cierre de USAID, el aumento potencial de deportaciones de inmigrantes ilegales o las iniciativas para cobrar 4,5% de impuestos sobre las remesas podrían afectar notablemente a las economías de varios de los países que podrían ser sus aliados potenciales.

En este nuevo escenario, China persiste en su enfoque que apunta a consolidar la resiliencia de su economía, reforzar su relación con sus vecinos asiáticos y profundizar sus relaciones con el Sur global. Frente a la imprevisibilidad de la política de EEUU, ese país se propone como un polo de estabilidad y un defensor de los mecanismos comerciales multilaterales y de las Naciones Unidas. Según observadores, su apuesta es a consolidar su ascenso como potencia global gracias al retiro o la volatilidad de la actuación estadounidense en varios temas críticos.

Ante el recrudescimiento de la disputa comercial con EEUU y la imposición de elevados aranceles a las exportaciones chinas a ese país, Pekín está apuntando a fortalecer sus relaciones, comercio e inversiones en América Latina.

Aunque parece complicarse la posibilidad de que México y América Central se transformen en plataformas para la relocalización de industrias manufactures chinas para luego exportar desde ahí a EEUU, persiste el interés de Pekín por las materias primas abundantes en América Latina, soya, cobre y minerales para la transición energética, por los mercados que pueden absorber parte de sus exportaciones industriales y por una presencia fortalecida como operadores de grandes proyectos de logística en toda la región (puertos, caminos, vías férreas, etc.).

La prospectiva es que en los próximos años se profundice la disputa entre un agresivo retorno de EEUU a la región en su intento por lograr alineamientos políticos que le sean favorables y la persistencia de China como un socio comercial y económico indiscutible. No habrá un solo escenario para esa competencia, lo cual podría aumentar las diferencias intrarregionales, por ejemplo, con una Sudamérica con mayor autonomía para posicionarse frente a EEUU y China, por la dimensión y estructura de sus economías, una América Central más dependiente de EEUU y un México que está negociando un nuevo rol en la redefinición de las cadenas de producción industrial del norte de América.

No se percibe que Europa u otros actores globales tengan estrategias claras, de largo plazo y concertadas sobre su relación con América Latina. La Unión Europea y particularmente España tienen un vínculo histórico, político y económico importante con la región. Existen voces que sugieren que la rivalidad EEUU-China podría ser un factor que aliente una renovada alianza estratégica entre intereses europeos y latinoamericanos.

Sin embargo, algunas iniciativas europeas, como la estrategia Global Gateway, que priorizan intereses comerciales y geopolíticos, fomentando la privatización y concentración de beneficios en sectores dominados por elites locales, carece de mecanismos efectivos de transparencia, participación y protección de derechos humanos y ambientales. Así, los intereses europeos sobre la región, bajo el discurso de la cooperación y la transición verde, podrían reproducir prácticas de captura de rentas a través de inversiones que, en la práctica, no garantizan ni mayor inclusión social ni un desarrollo más justo para las poblaciones latinoamericanas<sup>4</sup>.

De igual modo, se están intensificando las relaciones con otros espacios, por ejemplo, con los países BRICS, pero sus efectos en las dinámicas clave son aún iniciales y es difícil prever sus impactos socioeconómicos y políticos.

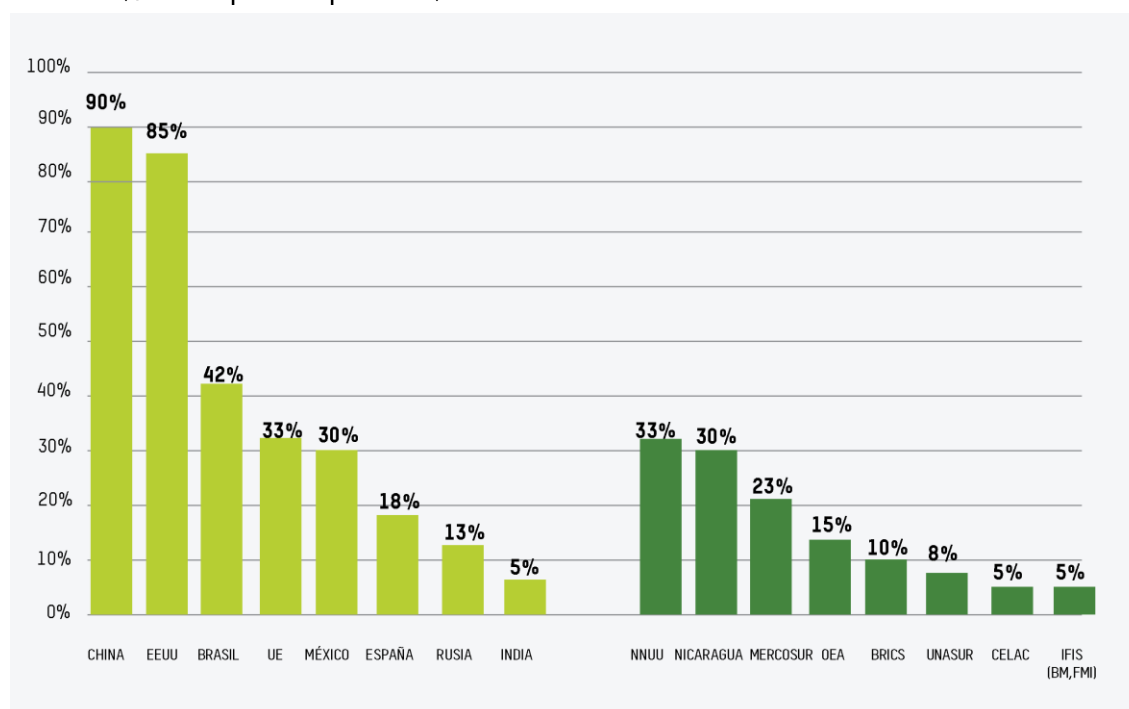
Frente a esta redefinición de los equilibrios geopolíticos y a los cambios en EEUU, se ha ratificado la notable debilidad del multilateralismo latinoamericano. Pese a que la migración o la seguridad podrían ser cuestiones en las que se precisa construir una posición común de los países de la región frente a EEUU, el diálogo ha sido escaso y no se pudo siquiera dialogar en conjunto sobre estos nuevos retos. Ni la OEA, ni CELAC pudieron reaccionar en estas cuestiones.

Habrá que ver si el nuevo secretario ejecutivo de la OEA logra reactivar a esa institución y si algunos grandes países, particularmente Brasil y México, consiguen articular estrategias renovadas para articular posiciones comunes en el futuro próximo. Mientras tanto, es probable que cada país tenga que definir su posición y negociar unilateralmente.

Los especialistas consultados ratifican esas tendencias: centralidad de EEUU y China, esperanza por un liderazgo de Brasil y México y por una revitalización de la influencia europea y poca confianza en la capacidad de las entidades multilaterales para intervenir (Cuadro 5).

A mediano plazo, sigue pendiente la posibilidad de avanzar en alianzas y acuerdos regionales para tener mayor poder de negociación y encontrar una posición favorable y soberana en el nuevo tablero geopolítico global que está emergiendo. Una renovación de los instrumentos de integración o, al menos, la posibilidad de construir alianzas ad hoc entre varios países en temas estratégicos parece ser una tarea urgente pero que aún no se percibe en el horizonte.

**Cuadro 5. En el nuevo escenario geopolítico: países y entidades multilaterales que tendrán mayor influencia (% de respuestas positivas)**



Fuente: Elaboración propia con base en consulta Delphi.

## SEXTA TENDENCIA. UNA NUEVA ERA EN LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

Hay cierto consenso en que se está produciendo una recomposición brusca y significativa de la cooperación para el desarrollo en todo el mundo. La reducción masiva de los recursos asignados a la ayuda a países en desarrollo por EEUU que ha llevado al cierre de USAID está provocando fuertes efectos debido a que este país era el principal donante global de ayuda y asistencia humanitaria.

Sus efectos no se limitan al cierre de miles de proyectos e iniciativas en todo el mundo que eran financiadas mediante programas de cooperación bilateral, sino también a la reducción de recursos para entidades de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales en áreas críticas de atención humanitaria, salud básica y protección social.

Incluso en un escenario de reactivación de esa fuente de financiamiento en EEUU, la situación será precaria debido al tiempo que podría implicar la puesta en marcha de un nuevo dispositivo y a las

incertidumbres que genera su probable activación en función de objetivos que excluyen temas relacionados con la equidad, la diversidad y la sostenibilidad ambiental.

Los primeros decretos ejecutivos de Trump apuntan explícitamente a que la ayuda exterior esté alineada con su política exterior y los intereses geoestratégicos de EEUU, lo que podría llevar a priorizar temáticas y organizaciones alineadas con el movimiento MAGA (*Make America Great Again*), incluyendo grupos ultraconservadores y anti-género.

Este gran cambio se produce además en un periodo de reajuste de la ayuda de varios donantes europeos tradicionales, como Suecia, Dinamarca, Holanda, Reino Unido y Alemania, que están concentrando sus esfuerzos en ciertas regiones, disminuyendo su apoyo en otras y reduciendo sus presupuestos en este ámbito para reducir sus déficits públicos o asignar los recursos a otras prioridades.

Su efecto directo en América Latina no es homogéneo, los países de América Central y en menor medida Colombia son los más afectados. La ayuda estadounidense bilateral representaba aproximadamente el 27% del total de desembolsos de ayuda oficial al desarrollo que recibieron los países de América Latina y el Caribe en 2023 según datos recopilados por la OECD<sup>5</sup>, es un monto muy significativo. Pero hay también impactos indirectos por la disminución de recursos de agencias de Naciones Unidas y otras entidades multilaterales, a las que se agregan los recortes de los donantes europeos.

De alguna manera, el cierre de USAID es el punto culminante de un lento proceso de recomposición de la estructura y condiciones de la cooperación para el desarrollo en América Latina que empezó hace unos quince años.

Desde inicios de siglo, el monto de cooperación de fuentes bilaterales se fue reduciendo debido a que muchos países latinoamericanos fueron calificados como de renta media y a una creciente focalización de esa ayuda hacia otras regiones, principalmente África. En términos globales, la ayuda para el desarrollo a la región se ha mantenido estable desde 2010 en torno a USD 11.000-12.000 millones.

La propia composición de los donantes se fue transformando lentamente desde inicios de siglo (Cuadro 7). Los bancos multilaterales regionales aumentaron su participación, los aportes de fuentes europeas (bilaterales y de la Unión Europea) se redujeron significativamente y las entidades de Naciones Unidas también disminuyeron su presencia financiera. En el último quinquenio, esas tendencias se ratificaron con el anuncio del retiro o disminución drástica de financiamientos de donantes europeos históricos de gran relevancia como Alemania, Dinamarca, Suecia y Holanda.

El mayor protagonismo de los bancos multilaterales está también cambiando las modalidades de ayuda, aumentando las transferencias que son directamente gestionadas por los Estados y disminuyendo las contribuciones a iniciativas de la sociedad civil. En ese mismo sentido, los financiamientos para temas relacionados con promoción de la democracia y de los derechos humanos se fueron reduciendo, mientras aumentaban los apoyos a cuestiones ambientales y humanitarias.

Tendencias que podrían reforzarse si los EEUU logra influir en los directorios de esas entidades, en las que tiene mucha presencia, para que se reorienten a sus propósitos "originales", como ha expresado el Secretario de Tesoro de ese país: el incentivo al desarrollo económico y la facilitación de infraestructuras, apartándose de temas "ideológicos" como el cambio climático o la igualdad.

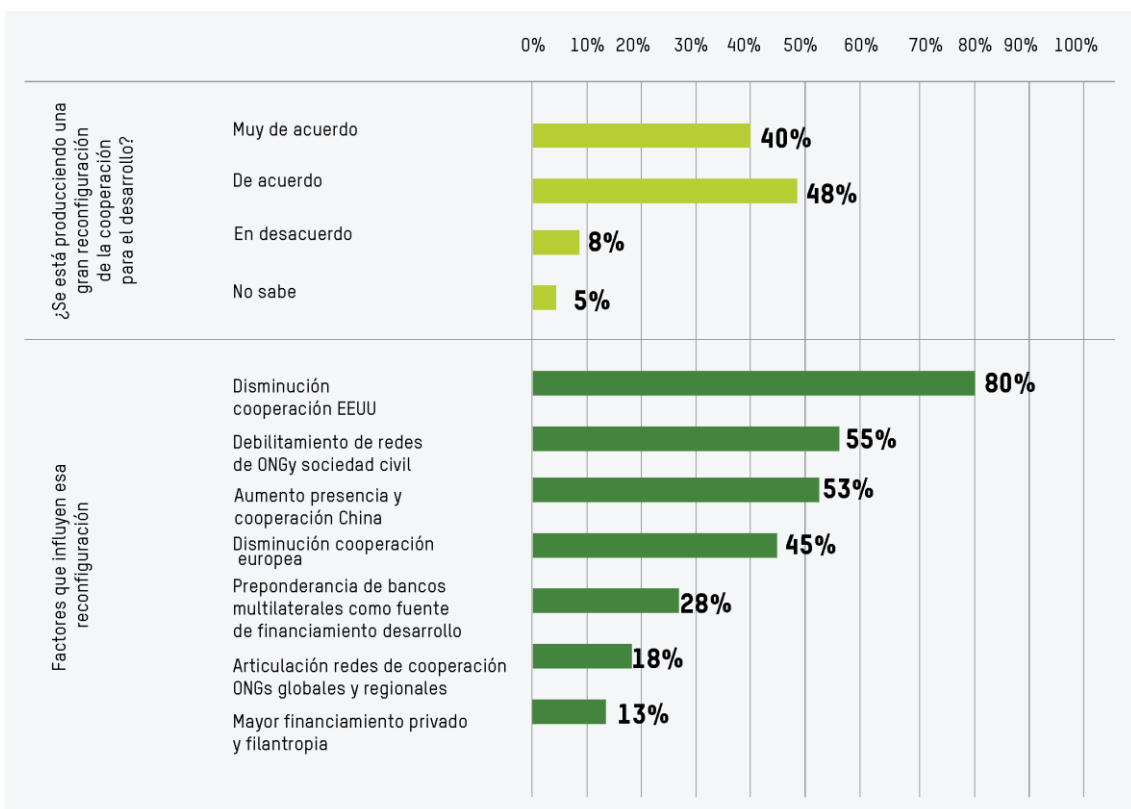
Aunque la ayuda bilateral de China ha venido aumentando en el último decenio, no parece que pueda reemplazar en el corto plazo la reducción del apoyo de EEUU y los países europeos, particularmente en iniciativas que tiene que ver con derechos humanos, vulnerabilidad social o democracia.

Por lo pronto, se está produciendo un gran reajuste en las entidades que recibían esos apoyos: cierre abrupto de proyectos, reducciones de personal y riesgo incluso para su funcionamiento futuro. En el corto plazo, se ha debilitado severamente, por ejemplo, a las redes de organizaciones

no gubernamentales que trabajan temas sociales, humanitarios, con migrantes y poblaciones vulnerables y de derechos humanos en América Central.

Esta contracción e incertidumbre en la arquitectura de la cooperación internacional para el desarrollo en América Latina sucede en un momento en que se acumulan problemas estructurales, como la gran vulnerabilidad frente a desastres producidos por el cambio climático, y se proyectan mayores presiones sociales por la reducción del crecimiento y la posibilidad de deportaciones masivas de migrantes. Centroamérica y Colombia son dos lugares particularmente vulnerables en este nuevo escenario.

En los próximos años, parece muy probable que se produzca una gran recomposición de los actores



del ecosistema de cooperación y ayuda para en el desarrollo en la región latinoamericana.

**Cuadro 6. Opiniones sobre la reconfiguración de la cooperación para el desarrollo de América Latina (% de respuestas)**

*Fuente: Elaboración propia con base en consulta Delphi.*

**Cuadro 7. Desembolsos ayuda para el desarrollo (AOD) (% por fuente) 2000–2023**

Fuente: Elaboración propia con datos OCDE.

## SÉPTIMA TENDENCIA. ENDURECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS

Desde hace mucho, América Latina fue el origen de varias oleadas de migración masiva hacia los Estados Unidos, principalmente desde México y los países del istmo centroamericano. Hoy en día, las migraciones involucran a casi todos los países y los flujos de migración no se dirigen únicamente hacia el norte, sino se producen al interior de la propia región.

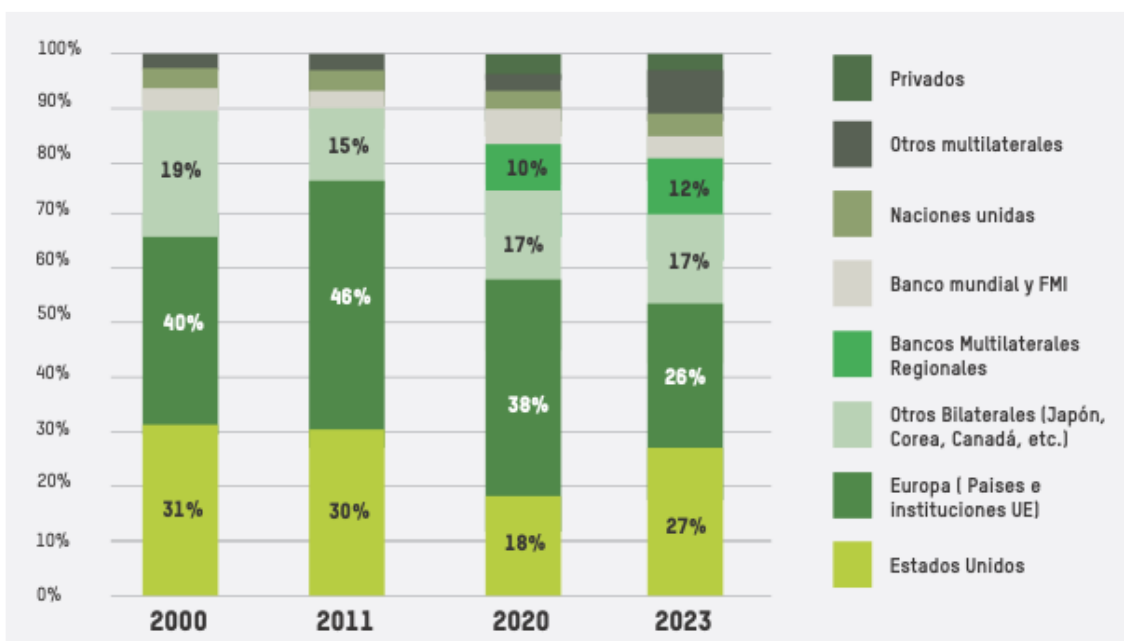
Al tiempo que las oleadas de migrantes se volvieron usuales a lo largo del continente, se generaron discusiones cada vez más intensas sobre su integración en las sociedades de acogida y su relación con problemas de inseguridad y de acceso a servicios públicos. En algunos países, como Perú o Chile, incluso aparecieron posiciones xenófobas que sugerían políticas restrictivas contra los migrantes, orientaciones que antes eran marginales.

El endurecimiento de la política migratoria es una de las principales prioridades de la administración Trump con su agenda "Estados Unidos Primero". Estos cambios son justificados bajo la teoría de una "invasión" migratoria lo que podría llevar incluso al uso de fuerzas militares en la frontera y a una política represiva inédita para detener inmigrantes ilegales en ese país.

Por lo pronto, se aceleraron los vuelos a varios países latinoamericanos con deportados y se realizaron grandes esfuerzos políticos y diplomáticos para que México y otros países latinoamericanos colaboren, amenazando incluso con medidas arancelarias si no hay acuerdo. Al mismo tiempo, se multiplican las medidas para desincentivar la llegada de inmigrantes y complicar los procesos de regularización.

A este preocupante panorama se adiciona el notable debilitamiento de las capacidades de acogida y acompañamiento de migrantes y refugiados por parte de entidades de NNUU y organizaciones no gubernamentales debido al recorte de la ayuda de USAID.

Los impactos de estas medidas son grandes, según el Consejo Americano de Inmigración las deportaciones masivas podrían llevar a las economías latinoamericanas a una recesión, un aumento repentino de la población desempleada, la pérdida de los pagos de remesas, lo que, a su vez, estimularía una mayor emigración hacia Estados Unidos. Este proceso desafía la capacidad de muchos gobiernos para reintegrar a los ciudadanos retornados y perturbarían los mecanismos de



cooperación regional, como la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección.

¿Cómo podrían reaccionar los gobiernos latinoamericanos ante el aumento drástico de las deportaciones y las demandas de mayor cooperación, incluyendo solicitudes para aceptar deportados bajo la amenaza de castigos económicos? ¿Cómo podría EEUU llevar a cabo estas medidas mientras preservando la cooperación regional en materia migratoria?

Si bien algunos países negociaron con EEUU la forma y el tratamiento de los que retornan, por ahora hay una gran ausencia de una estrategia regional definida tanto desde EEUU como de una Latinoamérica organizada ante estas restricciones.

En síntesis, las políticas de Trump están transformando la cuestión migratoria en el eje central de la relación entre Estados Unidos y América Latina, abriendo situaciones de tensión y vulneraciones a la soberanía de varios países y sentando las bases para una intensificación de las expulsiones y restricciones.

Hay, de igual modo, preocupaciones por las posibles violaciones de derechos humanos de migrantes y deportados, incluyendo muertes en el cruce fronterizo irregular, y posibilidades de crisis humanitarias o sociales en la frontera o en los países que acogerán a los retornados. A lo que se agrega, la tentación de varias fuerzas políticas, en países tan diferentes como Argentina, Chile, Panamá o Perú, de replicar los métodos de Trump para tratar la cuestión migratoria en sus territorios.

Si bien las deportaciones han aumentado, la promesa de expulsar a un millón de personas al año aún no se ha materializado. Aunque la asignación de nuevos fondos y la expansión de las facultades de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por su sigla en inglés) podrían acelerar este proceso en los próximos meses.

Paralelamente, se ha aprobado un impuesto del 3.5% sobre las remesas enviadas por inmigrantes indocumentados, medida que entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Este tributo afectará principalmente a migrantes mexicanos, quienes en 2024 enviaron más de 62,500 millones de dólares a México, representando el 3.5% del PIB del país. El impacto anual estimado por el nuevo tributo es de 2,700 millones de dólares, aunque se prevé que parte de esa cantidad se evada mediante métodos alternativos como criptomonedas o canales informales.

Aunque el escenario más extremo aún no se ha concretado, las políticas actuales indican una tendencia hacia medidas más restrictivas que podrían afectar significativamente a las comunidades migrantes y a las economías de sus países de origen.

# ESFERA 3: RENOVAR LA DEMOCRACIA Y DEFENDER LOS DERECHOS LOGRADOS

## OCTAVA TENDENCIA. DEBILITAMIENTO DE LA DEMOCRACIA Y CRISIS DE REPRESENTACIÓN

Desde hace varios años, varias mediciones de opinión pública<sup>6</sup> muestran un debilitamiento de la adhesión de los latinoamericanos con el régimen democrático y una gran insatisfacción sobre sus resultados. En consonancia con esa tendencia, casi todas las instituciones democráticas obtienen calificaciones negativas en términos de confianza: los partidos, las asambleas legislativas, el poder judicial o los sindicatos.

Ese severo deterioro de la confianza en las instituciones democráticas alcanzó su mayor intensidad en los años posteriores a la pandemia y ha mejorado levemente en 2023 según reportes recientes<sup>7</sup>. Ese malestar no es, sin embargo, reciente: los latinoamericanos tienden a apoyar a la democracia, pero son escépticos sobre su funcionamiento desde hace mucho, percibiéndose una mejora significativa entre 2005-2010 en los años de alto crecimiento económico, que luego se revirtió.

La ciudadanía latinoamericana parece adherir mayoritariamente a los mecanismos democráticos, particularmente al voto, pero no tienen mucha confianza en el desempeño de las instituciones y están por lo general insatisfechos con los resultados de ese sistema de gobierno.

Esas opiniones sugieren una democracia frágil, cuya legitimidad y estabilidad depende en buena medida de los resultados que los gobiernos logran o de la capacidad de algunos líderes para construir apoyo social. El deterioro de la gobernabilidad y el aumento de la inestabilidad política después de la pandemia ilustra esas dinámicas.

En esos años (2019-2022), varios presidentes no pudieron acabar su mandato, el voto se fragmentó, la polarización y la crispación política se extendieron y se produjeron grandes y masivas protestas sociales en todo el continente.

También emergieron en esos años líderes y movimientos políticos, que se diferenciaron de los partidos tradicionales, que mostraron resultados en cuestiones relevantes para la población, lo cual les permitió fortalecer su popularidad y legitimidad, pero también concentrar el poder.

Si bien hay cierta continuidad en las opiniones de la ciudadanía sobre la democracia y sus instituciones, en el último decenio se han consolidado algunos rasgos clave para la gobernabilidad y el futuro de la democracia: los sistemas de partidos tradicionales han prácticamente desaparecido en la mayoría de países, aparecieron nuevas fuerzas políticas, la mayoría frágiles y dependientes de liderazgos individuales, la volatilidad electoral se ha profundizado, la corrupción persiste y el voto parece definirse más por rechazos que por adhesiones ideológicas o programáticas.

Esas características producen, por una parte, gobiernos débiles, con mayorías parlamentarias inexistentes o muy volátiles y grandes dificultades para gobernar. Pero, también, facilitan la emergencia de nuevos líderes que suelen combinar una capacidad para descifrar y solucionar problemas críticos de la población con una comunicación eficaz y permanente.

Aunque el éxito de estos gobiernos tiende a estabilizar y mejorar la adhesión y confianza en el régimen democrático, sus estilos de gobierno, frecuentemente centralizados, polarizadores y sin

intermediaciones, no consolidan instituciones sólidas y hacen que la estabilidad y la legitimidad democrática dependan de los logros y habilidades de un líder.

Por otra parte, en varios países se fueron consolidando regímenes políticos con fuertes rasgos autoritarios y antidemocráticos, que están restringiendo libertades, cerrando espacios de participación cívica y eliminando la división de poderes. Desde el inicio de la transición democrática en los años 80 del siglo pasado, no se habían observado vulneraciones a los derechos políticos y humanos de la dimensión que se están produciendo en algunos países de la región.

En síntesis, la democracia está vigente en la mayoría de países, pero enfrenta crecientes desafíos, algunos de ellos relacionados con la falta de confianza de la ciudadanía en sus instituciones, el notable debilitamiento de los partidos, las mediaciones y del poder judicial y la insatisfacción con los resultados concretos de la política. En ese contexto, se están consolidando algunos regímenes marcadamente autoritarios y está aumentando la tentación por liderazgos fuertes y centralizadores en casi toda América Latina.

## **NOVENA TENDENCIA. LA DISPUTA POLÍTICA POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LAS DIVERSIDADES**

La reivindicación de la igualdad de género y de los derechos de las diversidades sexuales son una de las dimensiones más sensibles de la disputa ideológica y política que se está instalando a nivel global y también en América Latina.

Es un ámbito en el que se produjeron avances significativos, pero en el que también se generaron fuertes resistencias de sectores conservadores que fueron constituyendo una poderosa red de organizaciones, ideólogos y fuerzas políticas que apuntan a revertir esos avances.

En la actualidad, el rechazo al feminismo y a las políticas de derechos de las diversidades, junto con un radical liberalismo económico, se ha transformado en un factor político que está disputando el espacio a las derechas tradicionales e incluso que las está desplazando.

El triunfo de Trump y su agresiva agenda contra todas las políticas de inclusión, diversidad y equidad está reforzando a esas fuerzas políticas y las está animando a explicitar sus posiciones. En varios países, esas coaliciones no apuntan únicamente a ganar adhesiones, están proponiendo revertir legislaciones y normativas de protección de los derechos de mujeres y diversidades una vez que lleguen al poder.

El desmantelamiento de las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) en la administración federal de Estados Unidos y la agresiva política de recorte de derechos de las personas transgénero que algunos expertos califican como discriminación institucional en los primeros meses de la administración Trump podrían fortalecer el cambio que ya se estaba produciendo en América Latina en esas cuestiones.

Siguiendo esto, parece muy probable que en los próximos años se intensifique la disputa ideológica en torno a los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales. La ofensiva es y será fuerte y tiene narrativas e instrumentos poderosos para su difusión, en medios tradicionales y redes sociales, respaldado además por el ejemplo político de Estados Unidos y su red de sus aliados latinoamericanos, como Javier Milei en Argentina y Nayib Bukele en El Salvador, que además están logrando ser populares.

Los ámbitos de la disputa van más allá de la política, tienen que ver con el futuro de las redes de organizaciones feministas y defensoras de derechos que están perdiendo recursos, con la posibilidad de que organizaciones multilaterales, como las agencias de Naciones Unidas, mantengan esas orientaciones entre sus prioridades o de manera general con el intenso debate, cada vez más polarizado y agresivo, sobre estas cuestiones en redes digitales y medios de comunicación.

Si bien los discursos conservadores a nivel global están creciendo, en América Latina el avance de los grupos organizados contra los derechos humanos y las diversidades sexuales y culturales no depende únicamente de influencias externas. Son fuerzas que ya venían articulándose en el territorio, ganando espacio en los medios tradicionales, sociedad civil, la política institucional y las redes sociales.

Estas corrientes están sabiendo capitalizar el malestar social, el desencanto con las democracias y los temores identitarios, consolidando una narrativa que propone "orden", "familia" y "tradicición" como antídotos frente al desorden, la crisis económica y los avances en derechos conquistados en las últimas décadas.

Desde las visiones progresistas hay una gran necesidad de generar condiciones para resistir a esta ofensiva conservadora y avanzar en el logro de nuevos derechos, pero eso requiere una renovación de narrativas, instrumentos y formas de organización social y política. Pese a las restricciones, uno de los temas críticos futuros es fortalecer a las organizaciones sociales que están en primera línea de esta disputa.

## **DÉCIMA TENDENCIA. SEGURIDAD PÚBLICA: LA PULSIÓN AUTORITARIA**

La inseguridad y el crimen organizado no son fenómenos nuevos en América Latina, vienen evolucionando al ritmo de las mutaciones de los mercados ilegales de drogas, armas o trata de personas, el cambio tecnológico y la movilidad de las personas. Por ejemplo, los cambios en la geografía de la economía de la droga fueron involucrando al paso del tiempo a más países como productores, espacios de tránsito o sitios de inversión de los beneficios de ese negocio ilícito, acompañando su expansión con violencia y aumento de la criminalidad.

Junto con las transformaciones sociales propias de cada país, en el último decenio se expandieron las redes transnacionales de crimen organizado aumentando la inseguridad y exacerbando la violencia incluso en países que no estaban acostumbrados a esas situaciones, como Ecuador, Costa Rica, Perú o Chile.

Al mismo tiempo, en México, Centroamérica y varios otros países, se fue potenciando la implantación en el territorio de estructuras criminales organizadas, dedicadas al narcotráfico y otros delitos, provocando enfrentamientos y un control delincencial de muchos espacios. Mientras, en EEUU se fue desarrollando una potente industria de tráfico de fentanilo, una droga sintética muy dañina, que está causando muertes y problemas sociales en ese país.

En estos años, la seguridad se volvió una de las demandas prioritarias de los latinoamericanos y un tema de gran insatisfacción por la incapacidad de los gobiernos para aportar soluciones al problema. En ese contexto aparecieron líderes políticos que proponen medidas autoritarias y de recorte de derechos para recobrar la seguridad y la paz.

Nayib Bukele se ha vuelto un ejemplo paradigmático y percibido como exitoso de esas orientaciones, transformándose en un referente regional. La oferta de "mano dura" se ha extendido por la región, apoyada por segmentos importantes de la población.

En un contexto de recrudescimiento de la lucha contra los drogas, los EEUU decidió calificar como terroristas a los carteles de narcotraficantes y grupos criminales, como el denominado Tren de Aragua. Se está además vinculando explícitamente las relaciones comerciales con estos fenómenos, imponiendo aranceles a México, Canadá y China con el argumento del fracaso de estos países en detener el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos.

No hay gran esperanza entre especialistas sobre la capacidad de este enfoque para dar soluciones sostenibles a esos fenómenos complejos, pero sí hay consenso sobre su potencial disruptivo y generador de conflictos y de paz en la región.

Los cárteles no son grupos terroristas como Al Qaeda o ISIS. Estructuras criminales, como las dos más grandes de México, la de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, no quieren derrocar al Estado. Tienen un objetivo menos ambicioso: ganancias ilimitadas. Por tanto, es poco probable que el uso de medios y tácticas militares afecte su modelo de negocios. Si se quisiera seriamente debilitarlos habría que verlos como empresas multinacionales depredadoras, aplicándoles una estrategia para golpearlos donde más les duele: en el bolsillo.

Eso implica reforzar los recursos del Departamento del Tesoro y cooperar estrechamente con los gobiernos latinoamericanos para dismantelar redes de corrupción y los sistemas de reclutamiento y logística de esas organizaciones. Lo cual debería estar acompañado de un compromiso para frenar el flujo de armas de fuego estadounidenses traficadas ilegalmente a México y el lavado de dinero en el sistema financiero estadounidense.

Por lo pronto, las medidas que se están anunciando podrían aumentar la violencia en algunos territorios de la región, fortaleciendo únicamente las dimensiones represivas de la lucha contra el narcotráfico, vulnerando la soberanía de los países con el argumento de luchar contra el narcotráfico-terrorismo y alentando el endurecimiento de las políticas de seguridad en todo el continente.

Este tipo de enfoque tampoco atiende a uno de los fenómenos más inquietantes de la inseguridad en América Latina: la infiltración del crimen organizado en las estructuras económicas, sociales y políticas en varios territorios latinoamericanos, en los cuales grupos criminales ejercen control territorial ante la ausencia de estado y la persistencia de la impunidad. El crimen organizado no sólo perpetúa la violencia, sino que también socava las instituciones y el desarrollo de la región, convirtiéndose en una amenaza directa para la gobernabilidad.

## **DÉCIMO PRIMERA TENDENCIA. ESPACIOS CÍVICOS DEBILITADOS, PERO CON NUEVOS ACTORES EMERGENTES**

Las sociedades latinoamericanas han experimentado cambios significativos en este primer cuarto de siglo. Aunque persisten problemas de larga data, sus estructuras, demandas y expectativas se fueron modificando después de varias décadas de democracia, periodos de crisis y bonanza, ampliaciones de derechos y transformaciones en la cultura, estilos de vida y consumo.

La mayoría de latinoamericanos viven en aglomeraciones urbanas, la proporción de personas en edad de trabajar en la población aumentó, las mujeres lograron un mayor protagonismo en la economía, la política y la cultura, los segmentos de ingresos medios crecieron, el acceso a tecnologías de comunicación se incrementó exponencialmente y la apertura a otras culturas y opiniones se intensificó.

Aunque persisten notables desigualdades y discriminaciones que afectan particularmente a mujeres, indígenas y afrodescendientes y a las personas de las diversidades sexuales, se produjeron avances en el reconocimiento de sus derechos. Esos procesos estuvieron acompañados por la emergencia de nuevas organizaciones sociales y renovadas formas de participación y activismo social, focalizadas en temas como la defensa del medio ambiente y la defensa y promoción de derechos.

Esa diversificación de espacios y experiencias de involucramiento cívico, frecuentemente informales, puntuales o coyunturales, coincidió con el debilitamiento de algunas de las organizaciones sociales de intermediación tradicionales, como los partidos, sindicatos o redes de ONGs más formales.

Las masivas protestas del periodo 2019-2023 que se produjeron a lo largo del continente, revelaron nuevas prácticas de organización y movilización, basadas en redes sociales digitales, adhesión personal a causas específicas, ausencia de liderazgos visibles y una notable desconfianza en las jerarquías y estructuras rígidas. Esas nuevas formas de activismo son particularmente importantes entre los movimientos ambientalistas, indígenas, de mujeres o LGBTQ, que reclaman su autonomía y el reconocimiento de sus identidades en la lucha por sus derechos.

Esa renovada vitalidad de voces e involucramientos cívicos contrasta, sin embargo, con su débil capacidad para ir más allá de la protesta o la movilización coyuntural, articular propuestas de mayor alcance e influir decisivamente en el rumbo de la política y el gobierno. Incluso en países donde los movimientos sociales habían logrado articularse con grandes fuerzas políticas progresistas desde fines del siglo pasado, como fue el caso del PT en Brasil, del MAS en Bolivia o del movimiento indígena en Ecuador, esos vínculos se fueron debilitando.

Esos cambios se producen en un momento en que se está produciendo un debilitamiento de los espacios cívicos y de participación ciudadana en muchos países debido a la centralización de las decisiones gubernamentales, la aguda polarización política y el debilitamiento de las estructuras de intermediación y transparencia de la información pública. En algunos países eso ha llevado incluso a ataques y restricciones del trabajo y funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil.

El panorama actual de los espacios cívicos latinoamericano es, en síntesis, diverso, complejo e inquietante. Por una parte, hay evidencias de un gran dinamismo e innovación en las formas de organización, comunicación y persuasión, en la capacidad de ciertas estructuras para involucrar a grandes grupos de población y en impulsar agendas ciudadanas renovadas.

Pero, por otra parte, hay demasiada desconfianza en los partidos y las instituciones, débiles capacidades de articulación política, mucha vulnerabilidad frente a la polarización y una gran concentración en batallas culturales e ideológicas en el torbellino de los medios y redes sociales.

Todo esto, en un momento en que desde los gobiernos y grupos de poder hay menos interés en promover la participación social. Observándose incluso acciones y decisiones que restringen el acceso de información y buscan desincentivar la constitución de espacios cívicos y de diálogo social.

## **DÉCIMO SEGUNDA TENDENCIA. DIGITALIZACIÓN Y NUEVAS FORMAS DE COMUNICAR, PARTICIPAR, POLARIZAR Y GENERAR CONFLICTO**

La región está inmersa al igual que todo el planeta en una gran transformación impulsada por el auge de las nuevas tecnologías de información que están afectando particularmente las maneras de comunicar, informar y coordinar y organizar la acción colectiva. Este proceso es muy intenso en América Latina, la región del Sur global en la que más rápido se ha extendido el uso del internet, sobre todo a partir de la masificación de los teléfonos móviles: entre 2010 y 2023 la proporción de personas que tienen acceso a ese espacio digital aumentó del 21% al 61%<sup>8</sup>.

Ese fenómeno está reconfigurando diversos ámbitos de la vida social y está impulsando una gran recomposición del ecosistema de medios de comunicación y de los espacios de formación de la opinión pública. Los medios de prensa escrita están en una crisis casi terminal en varios países, la televisión y radio están reduciendo su influencia y las conversaciones e interacciones sobre asuntos públicos se están trasladando a las redes sociales digitales.

En las últimas elecciones que se realizaron en la región, las redes sociales se constituyeron en los espacios privilegiados para el despliegue de las campañas y algunos candidatos, como Bukele, Milei o Noboa, las transformaron en sus plataformas prioritarias para difundir sus ideas y figura. Por otra parte, YouTube se volvió una vía clave para informarse con la proliferación de nuevos canales de *streaming* especializados en política y podcast de todas las orientaciones.

De igual modo, fue a través de esas redes que se convocaron y coordinaron grandes movilizaciones y protestas sociales, como fue el caso de Chile en 2019 o en Panamá en 2023, o donde se están desplegando las estrategias de influencia de las redes libertarias y conservadoras. Con el auge de ese nuevo sistema mediático se intensificaron también las conversaciones polarizadas y la radicalización de los discursos políticos, afectando la tolerancia y la confianza institucional.

Redes que son, de igual modo, utilizadas para manipular las tendencias y opiniones masivas a través de trucos como las "granjas de troles" y/o "bots" que son gestionados por seres humanos, los cuales controlan decenas o cientos de cuentas que a menudo son semiautomáticas y envían mensajes combinando poder computacional y conocimiento humano.

Instrumentos como estos también son usados para atacar a periodistas, medios independientes y propagar desinformación a través de noticias falsas que se viralizan hasta adquirir credibilidad en la opinión pública.

Estos dispositivos sobre todo se activan en épocas preelectorales, y según expertos, hace por lo menos una década son muy usuales en las campañas políticas de grupos de derecha y los denominados libertarios que incluso han llegado a cooptar esferas enteras como es el caso de X (ex Twitter). Por otro lado, grupos y personas opositoras a esas corrientes también ocupan esos espacios, es el caso de colectivos feministas, activistas por el medio ambiente y grupos y periodistas que promueven narrativas e información distinta.

Los espacios digitales se han convertido en un escenario relevante donde hoy se produce la política: ahí se construyen narrativas, se libran campañas electorales, se instalan debates y se disputan sentidos.

Este es un proceso que parece, en gran medida, irreversible, particularmente por que la brecha digital parece estarse reduciendo, no tanto por una estrategia deliberada de inclusión, sino por el propio curso acelerado del avance tecnológico —especialmente a través del uso masivo de redes sociales, el acceso móvil a internet y la expansión de plataformas de mensajería—. Aunque, esa aparente inclusión no siempre venga acompañada de condiciones equitativas de acceso, calidad y alfabetización digital, lo que genera una ilusión de conectividad democrática en un terreno que sigue siendo profundamente desigual.

En todo caso, los efectos de estos fenómenos se irán profundizando, constituyendo nuevos espacios ineludibles para la conversación pública, la lucha política y la construcción de ideas.

# REFLEXIONES FINALES

El periodo 2025-2030 se presenta como una etapa de profundas transformaciones e incertidumbres para América Latina. La interacción entre un contexto global disruptivo, marcado por el retorno de Trump y el debilitamiento del orden multilateral, y los desafíos estructurales propios de la región generará tensiones significativas en ámbitos como la economía, la política, los derechos humanos y la cooperación internacional.

La fragmentación regional y la dificultad para construir consensos dificultan la capacidad de América Latina para enfrentar estos desafíos de manera coordinada. Las tendencias analizadas exigen una reflexión profunda sobre las orientaciones del desarrollo y la necesidad de repensar las políticas públicas para garantizar un futuro más equitativo, sostenible y democrático para la región.

Frente a este contexto global y regional, que se presenta cada vez más hostil y desafiante para la agenda de la lucha contra las desigualdades, no basta con observar las tendencias; es imperativo delinear campos de acción urgentes e ineludibles. La actual recomposición de los equilibrios políticos, económicos y sociales, lejos de ofrecer nuevas oportunidades, parece más bien exacerbar las fracturas existentes y profundizar las desigualdades.

En este escenario, la defensa y el avance de una agenda de justicia social y reducción de las desigualdades se convierten en una labor de contención estratégica y de reinversión táctica, anclada en al menos cuatro desafíos fundamentales para continuar la reflexión:

1. **El desafío de las ideas.** ¿Cómo comprender este momento de cambio, sus dinámicas y sus efectos de mediano y largo plazo? ¿Qué respuestas de políticas progresistas podrían adaptarse a este nuevo tiempo? ¿Qué estrategias podrían imaginarse para reafirmar el valor de los derechos humanos como pilares para una agenda de justicia social?
2. **El desafío de las narrativas.** Frente a la disputa política y discursiva en torno a los valores y orientaciones del desarrollo y de los derechos urge repensar argumentos y explicaciones de la realidad que refuercen nuestro marco valórico sobre los derechos, la desigualdad, y el desarrollo sostenible. ¿Cómo promover o fortalecer imaginarios que inspiren la acción colectiva y ofrezcan visiones de futuro más equitativas y sostenibles, contrarrestando la hegemonía de narrativas que promueven la desconfianza, el individualismo y el fatalismo?
3. **El desafío de pensar un nuevo marco y rol de la cooperación para el desarrollo en la región.** ¿Cómo evolucionará la actual recomposición de la cooperación en el corto y mediano plazo y qué efectos tendrá en la movilización y disponibilidad de recursos? ¿Cómo se irán adaptando a este nuevo contexto los actores del desarrollo, particularmente los que pertenecen a la sociedad civil organizada? ¿Qué estrategias se puede visualizar para fortalecer el financiamiento de las iniciativas favorables a una reducción de las desigualdades, el desarrollo sostenible y una sociedad más democrática?
4. **El desafío de proteger los espacios de participación y articulación de la sociedad civil.** En tiempos caracterizados por la incertidumbre y la hostilidad, urge invertir en el fortalecimiento y la reconstrucción de espacios de diálogo y acción colectiva que trasciendan la lógica de la fragmentación y el enfrentamiento. ¿Cómo fortalecer organizaciones de la sociedad civil, redes vecinales y colectivos que promuevan la solidaridad y el bien común, sirviendo como contrapeso a las narrativas de división y desconfianza que dominan el debate público? ¿Cómo lograr transformaciones mediante una utilización innovadora y democrática de los espacios digitales? ¿Cómo contribuir a que se conviertan en lugares para el debate público constructivo, en lugar de dejarlos como simples escenarios para la propaganda?

# DOCUMENTOS CONSULTADOS Y LECTURA SUGERIDA POR ESFERA

## ESFERA 1: El futuro de las políticas socioeconómicas y ambientales en tiempos de incertidumbre

CEPAL (2025a). Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2024. CEPAL

CEPAL (2025b). Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2024: La trampa del bajo crecimiento, el cambio climático y la dinámica del empleo. CEPAL

Hausmann, R. (2025). Lograr un crecimiento vigoroso, sostenido, sostenible e inclusivo. En CEPAL (Ed.), Repensar el desarrollo en América Latina y el Caribe (pp.67-96). CEPAL

Hernandez-Roy, C. (2025). Effects of the Trump Administration's Tariff Threats Against Canada and Mexico. Center for Strategic and International Studies. <https://www.csis.org/analysis/effects-trump-administrations-tariff-threats-against-canada-and-mexico>

Hopenhagen, F. (2025). ¿Puede América Latina evitar el "extractivismo verde"? Dialogue Earth. <https://dialogue.earth/es/justicia/puede-america-latina-evitar-extractivismo-verde/#:~:text=El%20concepto%20se%20basa%20en,de%20materiales%20exportados%20que%20aportan>

Levy, S. (2025). Protección social y productividad en América Latina. En CEPAL (Ed.), Repensar el desarrollo en América Latina y el Caribe (pp.151-174). CEPAL

López, K. (2025). Reconfiguración de las cadenas globales de valor. Revista Foreign Affairs Latinoamérica. <https://revistafal.com/reconfiguracion-de-las-cadenas-globales-de-valor/>

Palma, J.G. (2024). América Latina y su "gatopardismo a la inversa": para que todo pueda seguir igual, nada puede cambiar ¿Trampa del ingreso medio o "trampa neoliberal"? El Trimestre Económico, Vol. XCII (1), núm. 365, enero-marzo 2025, pp. 7-74. <https://www.eltrimestreeconomico.com.mx/index.php/te/article/view/2682/2719>

Salazar, E. (2025). La COP30 y los desafíos energéticos de América Latina: una transición atrapada entre "zonas de sacrificio". Infobae. <https://www.infobae.com/peru/2025/04/01/la-cop30-y-los-desafios-energeticos-de-america-latina-una-transicion-atrapada-entre-zonas-de-sacrificio/>

## ESFERA 2: Los retos en un mundo multipolar y con disputas geopolíticas

Aguirre, M. (2025). Trump contra América Latina. Nueva Sociedad. <https://nuso.org/articulo/trump-contra-america-latina/>

Dodds, K. (2025). Trump y la Tierra: matriz geopolítica de una presidencia imperial. El Gran Continente. <https://legrandcontinent.eu/es/2025/04/04/trump-y-la-tierra-matriz-geopolitica-de-una-presidencia-imperial/>

Eurasia (2025). Top Risks 2025. <https://www.eurasiagroup.net/issues/top-risks-2025>

Gonzalez, G., Hirst, M., Lujan, C., Romero, C. y J.G. Tokatlian (2025). Trump y América Latina y el Caribe: ¿un laboratorio de control?. Nueva Sociedad. <https://nuso.org/documento/trump-y-america-latina-y-el-caribe-un-laboratorio-de-control/>

Harrison, C. y K. Robertson (2025). Tracking Trump and Latin America: Migration. AS/COA. <https://www.as-coa.org/articles/tracking-trump-and-latin-america-migration-judge-blocks-early-end-tps-haitians>

Oliví, I. (2025). ¿El fin de la ayuda al desarrollo?. Real Instituto Elcano. <https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/el-fin-de-la-ayuda-al-desarrollo/>

Ortiz, V. y V. Arpoulet (2025). Entrevista con Alvaro García Linera: América Latina y el “neoliberalismo soberanista” de Trump. <https://espai-marx.net/?p=17248>

Perfil (10 septiembre 2025). Juan Gabriel Tokatlian: “Este Estados Unidos es coerción pura” [Archivo de Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=3gerUTRlyWE>

Rugeles, A. (2025). La geopolítica de la incertidumbre. Revista Foreign Affairs Latinoamérica. <https://revistafal.com/la-geopolitica-de-la-incertidumbre/>

Ruiz-Camacho, P. (2025). ¿Integración o fragmentación? América Latina y el orden liberal. Revista CIDOB d'Afers Internacionals, Nro. 139, pp. 31-50. <https://www.cidob.org/publicaciones/integracion-fragmentacion-america-latina-orden-liberal>

Silva, J. (2025). Los retos de “encontrar el Norte”: Latinoamérica frente a la migración. Revista Foreign Affairs Latinoamérica. <https://revistafal.com/los-retos-de-encontrar-el-norte/>

Terrón, A. y T. Jung (2022). Construir las cooperaciones geoestratégicas de la Unión. El Gran Continente. <https://legrandcontinent.eu/es/2022/11/12/construir-las-cooperaciones-geoestrategicas-de-la-union/>

WOLA (2025). América Latina y los Frenéticos Primeros 100 días de Trump: Un Balance. WOLA. <https://www.wola.org/es/analysis/america-latina-100-dias-trump/>

### ESFERA 3: Renovar la democracia y defender los derechos logrados

Latinobarómetro (2025). Informe Latinobarómetro 2024: La democracia resiliente. Corporación Latinobarómetro. <http://www.latinobarometro.org>

Herz, M. y G. Summa (2025). La extrema derecha como amenaza para la gobernanza mundial. Nueva Sociedad, Vol. 315. <https://nuso.org/articulo/315-la-extrema-derecha-como-amenaza-para-la-gobernanza-mundial/>

La Mula Stream (16 abril 2025). ¿Un modelo Bukele para América Latina?: Lucía Dammert [Archivo de Video] en Al Filo. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=1yqr7rSwbRc>

Meyer, M. y C. Welch (2025). Limitando el espacio cívico: el endurecimiento de las restricciones a la sociedad civil en las Américas. WOLA. <https://www.wola.org/es/analysis/limitando-el-espacio-civico-el-endurecimiento-de-las-restricciones-a-la-sociedad-civil-en-las-americas/>

Miranda, A. y A. Venanzoni (2025). Atlas del pensamiento neorreaccionario: una primera bibliografía razonada. El Gran Continente. <https://legrandcontinent.eu/es/2025/06/28/atlas-del-pensamiento-neorreaccionario-una-primera-bibliografia-razonada/>

Montenegro, G. (2025). ¿Qué hacer con la seguridad?: Ni mano dura, ni garantismo. Revista Anfibia. <https://www.revistaanfibia.com/inseguridad-ni-mano-dura-ni-garantismo/>

Morán, J.M. (2023). La tercera ola neoconservadora en Latinoamérica: ofensivas contra los derechos sexuales y reproductivos. Iztalapa: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. <https://revistaiztapalapa.izt.uam.mx/index.php/izt/article/view/1852/1889>

Riorda, M. (2025). Los discursos de la incivilidad: Cuidado con esta democracia. Revista Anfibia. <https://www.revistaanfibia.com/cuidado-con-esta-democracia-discursos-de-incivilidad/>

# NOTAS

1. FMI. 2025. Perspectivas económicas regionales. Las Américas  
<https://www.imf.org/en/Publications/REO/WH/Issues/2025/04/25/regional-economic-outlook-western-hemisphere-april-2025>
2. CEPAL, 2025. Panorama Social de América Latina y El Caribe.  
<https://www.cepal.org/es/publicaciones/80858-panorama-social-america-latina-caribe-2024-desafios-la-proteccion-social>
3. CEPAL, 2024. Panorama social de América Latina y El Caribe.  
<https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/b47d0172-5948-467c-804e-083de2968fe9/content>
4. <https://counter-balance.org/uploads/files/EU-GG-report-2024-ES-nov07.pdf>
5. <https://www.oecd.org/en/topics/official-development-assistance-oda.html>
6. Ver las mediciones recientes realizadas por el Latinobarómetro y el Proyecto de Opinión Pública de América Latina y el Caribe de la Universidad de Vanderbilt (LAPOP).
7. Ver último informe de Latinobarómetro 2024 titulado “La democracia resiliente”.
8. <https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/>

© Oxfam en LAC, agosto, 2025

Este documento fue escrito por Armando Ortuño Yáñez.

Para más información o para aportar comentarios a este documento, póngase en contacto con [veronica.paz@oxfam.org](mailto:veronica.paz@oxfam.org)

Esta publicación está sujeta a copyright, pero el texto puede ser utilizado libremente para la incidencia política y campañas, así como en el ámbito de la educación y de la investigación, siempre y cuando se indique la fuente de forma completa. El titular del copyright solicita que cualquier uso de su obra le sea comunicado con el objeto de evaluar su impacto. La reproducción del texto en otras circunstancias, o su uso en otras publicaciones, así como en traducciones o adaptaciones, podrá hacerse después de haber obtenido permiso y puede requerir el pago de una tasa.